

Crónica del mes

Marzo

El escenario socio-político nacional durante el mes de marzo estuvo dominado por la coyuntura electoral, tanto antes como después del día 20; antes, por los preparativos del evento y el desarrollo de las campañas propagandísticas; después, por las vicisitudes del escrutinio y las acusaciones de fraude que ARENA y sus aliados político-ideológicos formularon contra el Consejo Central de Elecciones (CCE).

En el último mes de la contienda, las campañas de los partidos participantes no lograron alcanzar la "altura cívica" que la mayoría de fuerzas sociales demandaba de ellos. Como había venido ocurriendo desde la apertura del período de propaganda, ARENA y el PDC mantuvieron la batuta en punto a derroche de recursos financieros para el intercambio de acusaciones, a despecho del "pacto de caballeros" acordado el 18 de febrero, en virtud del cual ambos partidos se habían comprometido a desarrollar su propaganda dentro de los cauces legales y a cesar con los vituperios mutuos. La única diferencia consistió en que, tras el "pacto," la iniciativa en las acusaciones la tomó ARENA, articulando sus denuncias en torno al lucrativo negocio que para el PDC representaría la prolongación de la guerra, en razón de los 500 millones de dólares enviados anualmente por Estados Unidos para financiar el conflicto. Los portavoces principales de tales acusaciones fueron el coronel Sigifredo Ochoa Pérez y el Mayor

D'Aubuisson.

Las acusaciones areneras calaron hondo en el pundonor del PDC, al punto que el propio presidente Duarte, quien en general intentó permanecer al margen de la contienda, declaró que el coronel Ochoa estaba "jugando con el honor de la Fuerza Armada y eso es un delito militar... lo que está haciendo es denigrando a sus compañeros comandantes, y esto es anti-patriótico, porque esto lo va a tomar la guerrilla y lo va a echar como instrumento de propaganda." No obstante, no fue el presidente Duarte sino el Dr. Guillermo Guevara Lacayo quien más indignación mostró ante las acusaciones de Ochoa, a las cuales respondió asegurando que Ochoa era un "héroe de papel" que pretendía "manchar la memoria de verdaderos héroes de la guerra, como el coronel Monterrosa, Calito y otros." "La guerra" —añadió Guevara Lacayo— "no la manejamos nosotros los políticos, sino que hay una cúpula político-militar, en la cual están el Presidente de la República y el Alto Mando de la Fuerza Armada. Y en lo que se refiere a compras de armamento, Ochoa sabe que hay un comité que establece las necesidades. Y es el Pentágono de Estados Unidos quien hace las transacciones." A su vez, ante la demanda de pruebas concretas que le exigía el PDC, Ochoa presentó fotografías de la mansión de 2.5 millones de colones que el Dr. Guevara Lacayo estaba construyendo, y aseguró que ARENA presentaría otras pruebas de la

corrupción demócrata cristiana cuando ganara la mayoría en la asamblea legislativa en los comicios del día 20.

Coincidiendo con los intereses electoreros de ARENA —aunque aparentemente no fue ése su propósito deliberado— el 6 de marzo apareció en el *New York Times* un artículo de James Le Moyne sobre la malversación de fondos que habría efectuado en la Comisión Nacional de Restauración de Areas (CONARA) el Ing. Luis Mejía Miranda, ex-director de dicha entidad y quinto candidato a diputado por San Salvador postulado por el PDC. Según la información recogida por Le Moyne, Mejía Miranda aparecía involucrado en la malversación de 2 millones de dólares, los cuales formaban parte de un programa de 10 millones de dólares, financiado por AID para implementar proyectos de desarrollo comunal en las zonas devastadas por la guerra. Según uno de los oficiales norteamericanos que investigaban el caso, "las zonas más necesitadas de ayuda en este país eran las mayormente afectadas por los robos. Esta gente ha robado de los programas destinados a reconstruir las áreas destruidas por la guerrilla y ayudar a los pobres del campo." Asimismo, los investigadores sospechaban que, además de Mejía, al menos otros ocho funcionarios demócrata cristianos de CONARA así como miembros del PDC en los departamentos y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían subido artificialmente los costos de diversos proyectos de infraestructura comunal. Más aún, fuentes norteamericanas señalaban que "la forma en que se han llevado a cabo los robos los hacen sospechar altamente de que una corrupción similar afecta los otros programas pagados con cerca de 200 millones de dólares de fondos norteamericanos," de modo que investigaciones adicionales podían sacar a luz "una significativa corrupción en otros organismos estatales, si la embajada norteamericana en El Salvador está deseosa de investigar esos casos."

Según el artículo, tanto Mejía como el presidente Duarte habían sido informados a

principios del año de las sospechas que pesaban sobre aquél. Mejía habría renunciado tres meses antes a su cargo de CONARA bajo fuertes presiones de la embajada, pero el presidente Duarte habría tolerado que el PDC lo incluyera en su planilla de diputados por San Salvador, por recomendación de su hijo, Alejandro Duarte. El 4 de marzo, algunos dirigentes del PDC habrían intentado persuadir a Mejía para que retirara su candidatura y el propio mandatario habría ofrecido anular ésta, pero Alejandro Duarte lo habría defendido, insistiendo en que siguiera de candidato.

En respuesta a tales versiones, el propio Alejandro Duarte negó categóricamente que apadrinara a Mejía y menos aún que tuviera alguna responsabilidad en la malversación de que se acusaba a éste. Duarte aseguró que la información difundida por el *New York Times* constituía "un manipuleo para perjudicar mi candidatura e igualmente la posible ayuda al país que está por aprobarse en Estados Unidos." No obstante, indicó que ese mismo día solicitaría a la asamblea legislativa la apertura de un expediente para que se investigara y aclarara la denuncia, e incluso aseguró que aconsejaría a Mejía que se exonerara del cargo de diputado suplente que ostentaba y renunciara a la candidatura para quinto diputado propietario por San Salvador "porque si él está limpio no debe temerle a nada, y si es culpable tiene que ser castigado." Por su lado, después de un momento inicial de reticencia sobre las medidas a adoptar sobre el caso, la directiva del PDC entregó el día 8 al CCE un escrito solicitando la anulación de la candidatura de Mejía para no empeñar el curso de las investigaciones.

Mientras tanto, a la sombra de la denuncia avalada por el prestigio del *New York Times*, un alud de testimonios sobre otros hechos de corrupción gubernamental invadió el escenario electoral. Entre ellos destacó la denuncia que la Asociación de Trabajadores del MOP (ATMOP) formuló el día 8, acusando al PDC de emplear vehículos livianos

y pesados así como combustible del ministerio para movilizar manifestantes a sus distintos mitines propagandísticos. La dirigencia de ATMOP también denunció que unos 400 empleados del MOP —entre motoristas, vigilantes y peones, pero también jefes intermedios— se ausentaban de sus tareas en horas laborales para realizar actividades de propaganda a favor del PDC.

En el mismo marco, el ex-encargado de la oficina de relaciones públicas de Bienestar Magisterial denunció un faltante de 500 mil colones en el proyecto de restauración de escuelas desarrollado por el Ministerio de Educación a través de APRE; mientras que la Asociación Sindical de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) denunció que la dirigencia de ANTEL sustraía fondos de la institución por medio de fraudes en la licitación de servicios. Por su parte, la Asociación Pro Defensa del sector productivo de la zona oriental aprovechó la coyuntura para informar que solicitaría la intervención del Congreso de Estados Unidos para investigar el manejo de 225 millones que AID había destinado a la reactivación de la zona oriental, pero de los cuales los productores de oriente no habían recibido aún los beneficios esperados.

Mientras, una amplia movilización laboral empezó a gestarse en el sector público. El 4 de marzo, el Comité Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) realizó un paro de 8 horas en cuatro dependencias estatales: INPEP, ANDA, y los ministerios de Educación y de Cultura y Comunicaciones, en demanda de aumentos salariales, cese a despidos y traslados, y mejores prestaciones socio-laborales. El paro estaba programado para realizarse en once instituciones, pero tal propósito no pudo materializarse debido a que desde tempranas horas del día el gobierno giró instrucciones para que los cuerpos de seguridad ocuparan las instalaciones de las dependencias donde se habría de realizar el paro. El paro de labores que desde el 1 de marzo decretaron los

trabajadores de la alcaldía de San Salvador, en cambio, corrió mejor suerte. Pese a que el alcalde en funciones anunció el día 3 que la municipalidad procedería a despedir a 23 dirigentes de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y de la Asociación Nacional de Trabajadores Municipales (ANTRAM) si no retornaban a sus labores, después de las negociaciones entre la alcaldía y los huelguistas, el paro finalizó el día 5 con el acuerdo de un aumento salarial de 75 colones para todos los trabajadores de la alcaldía capitalina cuyo salario no excediera los 2 mil colones.

Las tensiones entre el gobierno y los trabajadores públicos fueron incrementándose como consecuencia de las advertencias del CCTEM de continuar realizando paros progresivos hasta que las autoridades gubernamentales accedieran a negociar su plataforma reivindicativa. El 9 de marzo, el Ministro de Defensa, general Carlos Vides Casanova, anunció a través de un mensaje televisado que la Fuerza Armada había incautado al FMLN documentos entre los cuales estaba incluido un plan denominado "Fuego," orientado a crear un frente amplio con "organizaciones de fachada" y a movilizar a la población con el propósito de provocar la acción armada contra el gobierno. Vides Casanova aseguró que entre los componentes del Plan Fuego estaban comprendidos paros laborales, obstaculización de calles, quemas de vehículos, manifestaciones, instrucción terrorista entre estudiantes de todos los niveles, etc. Entre las organizaciones de fachada a través de las cuales el FMLN intentaría operativizar el Plan Fuego, Vides mencionó a la UNTS y a otras organizaciones laborales y populares.

Al día siguiente, los diez miembros del consejo ejecutivo y delegados de las centrales sindicales de la UNTS ofrecieron una conferencia de prensa para rechazar las aseveraciones del general Vides Casanova, subrayando que las mismas eran "sacadas de la cabeza y buscan legitimar la represión contra el movimiento laboral." Por otra parte, apro-

vechando la conferencia de prensa, la UNTS anunció que las bases de sus 467 organizaciones miembros habían decidido no votar el 20 de marzo como una medida de presión sobre el gobierno en pro del rescate de la soberanía nacional. El mismo día, horas más tarde, unos 60 sindicalistas de la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) realizaron una concentración frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, ubicadas en la zona franca de San Bartolo, en Ilopango, para exigir una audiencia al titular del ramo, Dr. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, con el propósito de plantearle sus demandas. Dado que éste no respondiera a la solicitud, los sindicalistas optaron por ingresar por la fuerza al local, donde se suscitó un forcejeo con la seguridad del ministro, en el curso del cual el Dr. Bernal fue lesionado en el rostro por uno de sus propios guardaespaldas.

Al momento de los incidentes se encontraban en el despacho ministerial tres sacerdotes, entre ellos el vicario general de la arquidiócesis, Mons. Modesto López, quien durante las siguientes seis horas fungió como mediador entre los sindicalistas y la Fuerza Armada. Como fruto de las negociaciones, los sindicalistas pudieron salir finalmente del recinto y pasar la noche bajo protección del arzobispado. Mientras tanto, una delegación de la UNTS que se dirigía al ministerio fue interceptada por un contingente de la Fuerza Aérea (FAS), el cual, tras solicitar refuerzos, capturó con lujo de violencia al secretario general de ASTTEL y directivo de la UNTS, Humberto Centeno, en medio de un fuerte forcejeo entre los captores y miembros de la delegación sindical. El día 11, la UNTS realizó un airada marcha para exigir la libertad de Centeno. Durante la manifestación, los participantes atravesaron unas 15 unidades de transporte público, incendiaron una gasolinera, 7 cajas telefónicas y varios vehículos nacionales, y realizaron numerosas pintas en protesta contra "la política represiva en contra de los trabajadores ordenada por el gobierno de Estados Unidos, el PDC y el Alto Man-

do de la Fuerza Armada." El mismo día, tras ser severamente golpeado en la FAS, esta unidad remitió al dirigente sindical a la Policía de Hacienda, la cual, a su vez, lo internó en el Centro Médico de Diagnóstico para ser tratado de los graves traumatismos que sufriera en la FAS. El 12, la Policía de Hacienda hizo entrega formal de Centeno a su esposa.

Paralelamente al desarrollo de la conflictividad laboral, también en el ámbito militar se fue generando desde los primeros días de marzo una atmósfera tensa, la cual se profundizó conforme se aproximaba la fecha de las elecciones. A ello contribuyeron tanto las acciones urbanas y suburbanas desarrolladas por comandos milicias del FMLN, como el intenso patrullaje de la Fuerza Armada en las ciudades y las operaciones de contrainsurgencia en las zonas de persistencia guerrillera, dirigidas a contrarrestar las movilizaciones rebeldes e imposibilitar cualquier acción destinada a boicotear los comicios, según había amenazado el FMLN.

Durante la primera quincena del mes, la Fuerza Armada organizó dos nuevas operaciones de contrainsurgencia y reforzó las ya existentes. A su vez, tropas combinadas de los cuerpos de seguridad se dieron a la tarea de realizar pequeñas operaciones urbanas sorpresivas y acciones de cateo en las ciudades más importantes, especialmente en las áreas más populosas de la capital. Por su parte, los comandos y milicias del FMLN fueron acrecentando su operatividad a nivel de acciones político—militares, de sabotaje y de guerra psicológica con el propósito de bloquear en lo posible el normal desenvolvimiento de los comicios.

Las dos nuevas operaciones de contrainsurgencia, diseñadas *ad hoc* para garantizar el desarrollo de las elecciones, fueron denominadas "Libertad" y "Sufragio." Según informó el general Vides Casanova, la Fuerza Armada garantizaría mediante ellas la seguridad de la ciudadanía en 244 municipios donde funcionarían juntas receptoras de votos. Vides in-

dicó que solamente en 7 municipios del norte de Morazán, 10 de Chalatenango y uno de Cañas no se podrían desarrollar los comicios por las circunstancias de violencia imperantes. Por su parte, en el interior del país, las fuerzas del FMLN se dedicaron a arrear el sabotaje contra el sistema del tendido eléctrico nacional y la potencial infraestructura electoral, entre ella las instalaciones de ANTEL, así como los juzgados y comandancias locales de municipios donde funcionarían las juntas receptoras de votos.

A partir del 18, el FMLN decretó su segundo paro al transporte en el año. En vísperas de la entrada en vigencia de la medida, los rebeldes destruyeron 2 furgones, 2 autobuses departamentales, 3 vehículos particulares, un taxi y un camión que circulaban por la carretera del litoral, en Usulután. Al mismo tiempo, unidades rebeldes atacaron las posiciones militares de Azacualpa (Chalatenango), donde dieron muerte al alcalde del lugar. Otras fuerzas guerrilleras que incursionaron a la población de San Miguel de Mercedes, en el mismo departamento, destruyeron parcialmente las instalaciones de la alcaldía, el juzgado de paz y la comandancia local. Entre tanto, las instalaciones de la alcaldía y las oficinas de ANTEL de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, fueron destruidas como resultado de otro ataque insurgente. A nivel urbano, el 19 de marzo, comandos del FMLN hicieron estallar una bomba frente al Banco Financiero, en Metrocentro. El mismo día, una persona resultó herida y dos vehículos destruidos como saldo de la explosión de una bomba colocada dentro de un automóvil estacionado frente al Cinema. Una semana antes, habían explotado en la Zona Rosa otros dos vehículos cargados con senda bombas. Asimismo, en vísperas casi del evento electoral, el FMLN desarrolló un sabotaje masivo contra el sistema nacional de distribución de energía, afectando la casi totalidad del país. Según informó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL), entre el 17 y 21 de marzo, el FMLN habría destruido 42

torres y estructuras metálicas pertenecientes a 13 líneas de transmisión de 45 mil voltios. Pese a todo ello, las elecciones tuvieron lugar con relativa normalidad.

Tomando en cuenta las advertencias intimidatorias del FMLN y la poco atractiva oferta política que los partidos participantes ponían a disposición del electorado, la concurrencia a las urnas fue relativamente aceptable. Con todo, más de la mitad de electores potenciales no ejerció el sufragio, por diversas razones, que iban desde la imposibilidad de obtener el carnet electoral hasta la decisión deliberada de rechazar los comicios, pasando por diversas trabas operativas que surgieron el día del evento. Los primeros resultados de cómputo de votos mostraron pronto una victoria abrumadora de ARENA, al punto que la dirigencia demócrata cristiana, antes de que el Consejo Central de Elecciones (CCE) anunciara los resultados oficiales, corrió a felicitar a la cúpula arenera. Ello no obstó, sin embargo, para que apenas dos días después del evento empezaran a suscitarse enconadas protestas de ARENA y de sus aliados ideológicos denunciando presuntos intentos de los representantes del PDC y del PCN ante el CCE para manipular los residuos electorales, aprovechando la lentitud y el desorden con que el escrutinio se estaba desarrollando, y así reducir los diputados ganados por ARENA, concediéndoselos al PCN.

Las dificultades se concentraban en el escrutinio de Usulután, La Unión y San Salvador. No obstante, el 26 de marzo, el presidente del CCE anunció públicamente que los problemas habían sido resueltos y que la distribución final de diputados adjudicaba 31 a ARENA, 22 al PDC y 7 al PCN. En horas de la tarde del mismo día, empero, el propio presidente (PDC), acompañado del consejal del PCN, decidió realizar un segundo escrutinio de los departamentos señalados, para lo cual requirieron las cajas receptoras de votos que se encontraban depositadas en el Proyecto Electoral. ARENA procedió entonces a mon-

tar un cerco de manifestantes en torno a las instalaciones del Proyecto, para evitar que las cajas fueran trasladadas al Hotel Presidente, donde el CCE pretendía efectuar el re-escrutinio. Los consejales del PDC y del PCN decidieron, a su vez, recurrir a las copias de las actas de las juntas receptoras de votos en poder de los partidos políticos y de la fiscalía. El recuento se reanudó el 29, tras el retiro del consejal de ARENA, quien adujo que no avalaría con su presencia "una maniobra ilegal y de tipo político." El mes finalizó sin que el CCE anunciara oficialmente la distribución de los diputados.

En lo relativo al panorama regional, el mes de marzo constituyó el escenario de tres grupos de eventos cuyos dinamismos contrapuestos fueron reflejo cabal de las contradicciones afrontadas por el proceso político centroamericano. En orden cronológico, el primer evento relevante del mes fue el encuentro anual de los cancilleres de la Comunidad Económica Europea (CEE), Centroamérica y el Grupo Contadora, realizado en Hamburgo entre el 29 de febrero y el 1 de marzo. Aunque el evento no satisfizo las expectativas de ayuda económica que los participantes centroamericanos esperaban de Europa, la CEE ofreció estudiar las posibilidades de implementación de un programa de cooperación económica de emergencia, el cual podría alcanzar un monto de 1.431 millones de dólares. En el aspecto político, la CEE reiteró su respaldo al proceso de Esquipulas II y manifestó su disposición a colaborar para la verificación *in situ* de los acuerdos de paz.

Un segundo grupo de eventos, en una línea

antagónica al encuentro de Hamburgo, catalizó las tensiones en la región a raíz de la ofensiva que el Ejército Popular Sandinista (EPS) emprendió el 6 de marzo en el sector de San Andrés de Bocay, en la confluencia del río Coco, justo en la franja fronteriza con Honduras, para desalojar de la zona a las tropas contrarrevolucionarias. La Casa Blanca aprovechó la ocasión para acusar a Nicaragua de haber violado territorio hondureño y justificar el envío inmediato a Honduras de un refuerzo de 3.200 efectivos norteamericanos, lo cual, a su vez, movió al gobierno nicaragüense a solicitar una reunión urgente del consejo de seguridad de la ONU.

Finalmente, el tercer grupo de eventos giró en torno a las conversaciones desarrolladas entre el 21 y 23 de marzo en Sapoá, en territorio nicaragüense fronterizo con Costa Rica, entre una delegación del gobierno sandinista, presidida por el Ministro de Defensa, general Humberto Ortega, y delegados de la contrarrevolución. Luego de tres días de negociaciones, ambas delegaciones llegaron al acuerdo en virtud del cual los contrarrevolucionarios se comprometían a concentrar sus tropas en determinadas zonas que se delimitarían de común acuerdo y a renunciar a todo tipo de ayuda militar, aunque podían recibir asistencia humanitaria de parte de organizaciones neutrales. Por su lado, el gobierno nicaragüense se comprometía a cumplir con los puntos pendientes que le exigía Esquipulas II. A efecto de definir al *modus operandi* de los acuerdos, las partes convinieron en volver a reunirse en Sapoá el 5 de abril para concluir las negociaciones.